

ACTA DE ASAMBLEA FEDERAL

INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES (INCAA)

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los VEINTICUATRO (24) días del mes de abril del año dos mil veintiséis, siendo las 11:00 horas se reúnen en modalidad híbrida, los miembros de la Asamblea Federal del INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES ("INCAA") en el marco del artículo 2° y 4° de la Ley N° 17741 (t.o. 2001) y modificatorias. La misma está presidida por el Licenciado Carlos PIROVANO en su carácter de Presidente del INCAA. Se encuentran presentes los siguientes representantes jurisdiccionales en carácter de asambleístas:

- (i) Por la Provincia de Buenos Aires: la Señora Liliana Amalia MAZURE, Asesora de Presidencia del Instituto Cultural del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
- (ii) Por la Provincia de Catamarca: la Señora Lidia CORIA, Asesora del Área Audiovisual.
- (iii) Por la Provincia del Chubut: el Señor Diego COLMAN, Director de Desarrollo Cultural.
- (iv) Por la Provincia de Córdoba: la Señora Silvina NANO, Subdirectora de Industrias Culturales a cargo del Polo Audiovisual de la Agencia Córdoba Cultura.
- (v) Por la Provincia de Corrientes: el Señor Facundo Andrés VALLEJO YUNES, del Departamento de Artes Audiovisuales.
- (vi) Por la Provincia de Entre Ríos: el Señor Maximiliano SCHONFELD, Presidente del Instituto Autárquico Audiovisual de la Provincia (IAAER).
- (vii) Por la Provincia de Mendoza: el Señor Sebastián LADRÓN DE GUEVARA, Director de Industrias Creativas.
- (viii) Por la Provincia de Misiones: el Señor Sergio ACOSTA, Presidente del Instituto de Artes Audiovisuales de Misiones.
- (ix) Por la Provincia del Neuquén: el Señor Martín FERRARI FREIRE, Director General de Fomento a la Industria del Cine.
- (x) Por la Provincia de Río Negro: la Señora Lara DECUZZI, Directora del Polo Audiovisual.
- (xi) Por la Provincia de San Juan: el Señor Luciano GUTIERREZ, Director de Acción Cultural.
- (xii) Por la Provincia de Santa Cruz: el señor Mario CADIZ, Director General de Realizaciones Artísticas.
- (xiii) Por la Provincia de Santa Fe: el Señor Paulo RICCI, Secretario de Desarrollos Culturales.
- (xiv) Por la Provincia de Santiago del Estero: el señor Juan Anselmo LEGUIZAMÓN, Subsecretario de Cultura.
- (xv) Por la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur: el Señor Aureliano RODRIGUEZ GOMEZ, Secretario de Cultura.
- (xvi) Por la Provincia de Tucumán: la Señora Adriana CHAYA, Directora de Medios Audiovisuales.

Se deja constancia, que se encuentran presentes en carácter de Asesores: (i) Por la provincia de Buenos Aires el Señor Pablo TORELLO, (ii) Por la provincia de Catamarca la Señora Lizenth

BARROS y (iii) Por la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur el señor Alexis ERCOLE.

Asimismo, se encuentran presentes por el INCAA: (i) el Señor Carlos VARGAS EGUINO, Gerente General del INCAA, (ii) la Señora Elisabet BLANCO, Gerente de Políticas Públicas, (iii) el Señor Diego MARAMBIO AVARIA, Subgerente de Film Commission, (iv) el Señor Guillermo Garma, Subgerente de Promoción y (v) la Señora María BIAIÑ, Coordinadora de Relación con las Provincias y Relaciones Institucionales.

Participan también la Señora Gabriela MAROCCO, asesora contable y el Señor Hugo CASTRO FAU, asesor jurídico de la Unidad de Apoyo Ad Hoc de la Asamblea Federal.

Habiendo quórum suficiente para la realización de la presente reunión se procede a sesionar para dar tratamiento al siguiente Orden del Día:

ORDEN DEL DÍA PROPUESTO ASAMBLEA FEDERAL 24/04

1. Firmantes del acta.

Se designan como firmantes del acta a la Señora Liliana Amalia MAZURE (Provincia de Buenos Aires), la Señora Lara DECUZZI (Provincia de Río Negro) y la Señora Silvina NANO (Provincia de Córdoba)

2. Informe sobre situación de representantes de la industria Audiovisual en el Consejo Asesor.

Liliana Mazure inició su intervención manifestando una profunda conmoción por el contraste entre el talento de las producciones nacionales y las políticas de ajuste actuales, afirmando que se le está "quitando al sector el derecho a respirar y a vivir". Sostuvo que mientras el Estado restringe el apoyo, grandes empresas internacionales como Netflix sí han comprendido la capacidad de producción y el talento argentino. Denunció específicamente que los directores carecen de representatividad en el Consejo Asesor debido a que no logran alcanzar las cuotas de público necesarias bajo los criterios actuales, lo cual calificó como una limitación al derecho de expresión. Aseguró que, a pesar de estas dificultades, el sector "encontrará la vuelta" para recuperar su lugar el año próximo. Finalmente, aclaró que la Ley no habla de "ayudas", sino de "políticas activas de fomento", lo cual implica una responsabilidad estatal superior a la mera asistencia.

Carlos Pirovano expuso que el sector audiovisual es privado y que sus integrantes no son empleados públicos, por lo que deben encontrar su propio modelo de negocio. Defendió la gestión actual informando que las convocatorias para el año 2026 ascienden a 14 millones de dólares, cifra que quintuplica lo destinado en 2023 y supera los niveles de los últimos 15 años. Subrayó que el talento debe competir y que el INCAA no otorgará fondos sin que los privados asuman riesgos, evitando así "darle de comer en la boca" al sector. Atribuyó la falta de candidatos en el Consejo a que las cámaras no son representativas, señalando que el 80% de la industria se encuentra fuera de estas estructuras. Respecto a los plazos, advirtió que no moverá las reglas para no violar la igualdad ante la ley. Concluyó que la falta de representación actual

debe verse como un "examen fallido" que permita un aprendizaje para mejorar el consejo el año próximo.

Silvina Nano, planteó que toda norma posee un espíritu y una motivación más allá de los requisitos temporales o administrativos. Destacó que, gracias a la gestión actual, las diferentes cámaras y asociaciones federales han logrado unirse forzosamente por primera vez. Por este motivo, instó a la Presidencia a priorizar la representatividad de todos los actores de la cadena de valor sobre los plazos de procedimiento, solicitando formalmente que se revise la posibilidad de que los productores accedan al Consejo para acompañar el trabajo del Instituto.

Lara Decuzzi propuso que la Asamblea Federal, en su carácter de órgano de cogobierno, actúe como un apoyo para la Presidencia al momento de pensar alternativas para no perder la voz del sector. Argumentó que la ausencia de las asociaciones en el Consejo perjudica directamente a las provincias, ya que las obliga a realizar un "doble camino" de consulta para conocer la opinión de los trabajadores de la industria sobre los concursos y políticas del INCAA.

Aureliano Rodríguez Gómez sostuvo que el problema no radica en que los realizadores deban "buscarle la vuelta" a la norma, sino en la necesidad de adaptar las reglamentaciones a la realidad del "interior profundo" del país. Manifestó que la falta de representatividad en ciertos sectores demuestra que la normativa actual no está adaptada a la geografía nacional. Cuestionó la base de datos de "personalidades destacadas", exigiendo saber cuántos de esos supuestos notables pertenecen realmente a provincias como Tierra del Fuego y no únicamente a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Enfatizó que la norma no puede terminar en la General Paz y debe alcanzar a todos los trabajadores de la cultura del país.

Carlos Pirovano defendió la normativa calificándola de "flexible" y aclaró que la Ley busca un "consejo de notables". Afirmó que existen cerca de 100 personas identificadas que podrían participar y que el INCAA no tiene la obligación de nombrar representantes de cada jurisdicción si no cumplen con el estándar de "destacados". Concluyó que es responsabilidad de las políticas públicas de cada provincia fomentar que sus ciudadanos logren alcanzar la excelencia requerida por la Ley Nacional para ser considerados personalidades destacadas.

Liliana Mazure vinculó el desfinanciamiento del INCAA con una realidad nacional donde se están recortando fondos a sectores vulnerables, el PAMI y la ANSES. Criticó la visión de la gestión sobre la "segmentación del talento", calificando como "horrible" la idea de categorizar a los realizadores entre destacados y no destacados bajo criterios exclusivamente económicos o de audiencia.

3. Ley de modernización laboral, artículos relacionados con el FNFC y el 1 de enero de 2028

Carlos Pirovano explicó de manera sucinta que la Ley de Modernización Laboral derogó el financiamiento específico del INCAA. Aclaró que esta medida no implica la desaparición del Fondo Nacional de Fomento Cinematográfico (FNFC), el cual continuará existiendo como la base

operativa del instituto. Precisó que lo que se modifica es la modalidad de fondeo: a partir del 1 de enero de 2028, y sujeto al presupuesto de ese año, los recursos serán asignados directamente por el Tesoro Nacional, el cual determinará la cuantía de los aportes al Fondo de acuerdo con lo que establezca la ley presupuestaria. Subrayó que se trata de un cambio estrictamente presupuestario y que la norma es clara en sus términos.

Liliana Mazure manifestó que el sector ya atravesó una situación idéntica en el año 2001, durante la gestión de Domingo Cavallo, cuando se eliminó el fondo y el INCAA pasó a depender exclusivamente de las decisiones del Ministerio de Economía. Recordó que aquel período fue similar al actual y destacó la intensa lucha que debió llevar adelante el sector para recuperar la autarquía del instituto. Afirmó que dicho logro fue posible bajo gobiernos con proyectos políticos muy distintos al actual. Finalmente, aseguró que realizarán todas las acciones necesarias para evitar que esta derogación del financiamiento específico entre en vigencia en enero de 2028.

Hugo Castro Fau Señaló que la denominada Ley de Modernización Laboral, al modificar el Fondo Nacional de Fomento Cinematográfico, está operando de hecho una reforma sobre gravámenes o impuestos. Advirtió que, según la Constitución Nacional, este tipo de proyectos debe ingresar obligatoriamente por la Cámara de Diputados, por lo que planteó la necesidad de evaluar si el Instituto debería iniciar una acción de inconstitucionalidad ante esta situación.

Carlos Pirovano Respondió que el INCAA no presentará ningún planteo de inconstitucionalidad, aunque aclaró que cualquier individuo u organización está en su derecho de hacerlo si lo considera pertinente. Coincidió con el asesor jurídico en que los recursos en cuestión son, efectivamente, impuestos. No obstante, ratificó su postura personal contraria a las asignaciones específicas. Argumentó que la democracia exige que los presupuestos se discutan anualmente en el Congreso y que sean los representantes del pueblo quienes asignen los recursos. Sostuvo que las asignaciones específicas impiden una verdadera discusión democrática y convierten al presupuesto en algo "eterno y sin cambio". Concluyó defendiendo un modelo de país moderno con impuestos de base amplia y una discusión parlamentaria transparente sobre las políticas públicas que justifiquen la asignación de recursos a la industria audiovisual.

4. Decreto 50/2026 - Informe del INCAA de la situación de la CAEC según Decreto.

Elisabet Blanco Elisabet Blanco informó sobre la reglamentación del Decreto 50/2026, el cual establece cambios en el sistema de calificación de las películas y sus categorías, proceso que se llevó a cabo con el consenso de las áreas de Educación y Niñez de acuerdo con lo estipulado por la ley. Explicó que, tras la derogación del Decreto 828, se implementó un protocolo de calificación basado en cuestionarios objetivos con ocho ejes temáticos, diseñado para eliminar la subjetividad en las evaluaciones. Destacó que este sistema aporta transparencia y previsibilidad, ya que las preguntas son públicas y permiten al productor conocer de antemano la posible calificación de su obra, dándole la opción de realizar ajustes técnicos para alcanzar una audiencia específica. Detalló que el protocolo fue el resultado de una resolución de firma

tripartita entre la Presidencia del INCAA, el Secretario de Educación y el Secretario de Minoridad para integrar diversas miradas en la calificación de materiales y tráilers.

Carlos Pirovano Carlos Pirovano añadió que se realizaron trabajos de simulación para verificar el comportamiento del nuevo sistema, concluyendo que el mismo otorga seguridad jurídica al sector privado al ser un método técnico y predecible. Sostuvo que el productor ahora tiene la certeza de que determinadas escenas ubicarán su película en un estamento de calificación específico y posee la libertad de ajustar su obra al protocolo si desea mejorar su posición calificatoria.

Liliana Mazure recordó que la ley de creación de la Comisión Asesora de Exhibición Cinematográfica (CAEC) data de marzo de 1984 y fue una de las primeras medidas del gobierno de Raúl Alfonsín para erradicar la censura estatal y los cortes arbitrarios. Señaló que aquel comité original garantizaba una representación democrática y variada de múltiples ministerios y sectores de protección a la niñez. Criticó el nuevo protocolo por basarse en una lógica de respuestas cerradas de "sí" o "no", argumentando que esto simplifica excesivamente la creación artística y no respeta la complejidad de los mensajes audiovisuales que se transmiten a través de la imagen, el sonido y los diálogos. Advirtió que, en una etapa donde las grandes corporaciones manipulan la circulación de contenidos, no se debe dejar la calificación de productos complejos librada a un sistema de casilleros, especialmente en lo que afecta a menores y adolescentes. Propuso formalmente que la Asamblea vote el rechazo del decreto para dejar un antecedente histórico en la trayectoria del instituto en defensa de la diversidad cultural y el análisis reflexivo por parte de personal calificado.

Carlos Pirovano expuso que la censura es un acto ejercido por el Estado y no por los privados, y que un comité integrado por representantes religiosos, psicólogos y funcionarios del Ministerio del Interior era precisamente lo que facilitaba el control arbitrario por parte del Estado. Defendió la objetividad del protocolo citando modelos probados en Holanda y países nórdicos, donde se garantiza la libertad de expresión sin arbitrariedades subjetivas. Explicó que el sistema permite al productor discutir su calificación basándose en una norma técnica en lugar de quedar a merced de la subjetividad de un grupo de personas que decidan de forma arbitraria.

Elisabet Blanco resaltó que el protocolo incorporó una demanda histórica de la industria al crear la categoría de "Supervisión Parental", que funciona como una opción intermedia necesaria entre la calificación Apta para Todo Público (ATP) y la restricción para menores de 13 años (SAM 13). Invitó a los asambleístas a estudiar las preguntas del protocolo para realizar devoluciones técnicas.

Votación: Se procedió a someter a votación la propuesta de rechazar el Decreto 50/2026. La Asamblea Federal resolvió aprobar el rechazo por mayoría.

5. Análisis de presentación de cuentas y Balances 2024, entregados por el INCAA a la Asamblea.

Liliana Mazure manifestó que el balance recibido por la Asamblea resulta sumamente llamativo y señaló que, tras analizarlo, el instituto parece haberse transformado en una entidad financiera en lugar de ser un organismo dedicado al fomento cinematográfico,. Destacó que el estado contable refleja una cartera de activos financieros que alcanza los PESOS CUARENTA Y DOS MIL MILLONES (42.000.000.000.-) , composición que consideró sorprendente para la naturaleza del INCAA. Solicitó una explicación clara sobre cómo se integra esa cifra y qué parte corresponde específicamente al ejercicio 2024, señalando la necesidad de analizar por qué no se trataron oportunamente las cuentas de 2023.

Gabriela Marocco Explicó que es necesario realizar una distinción técnica entre los periodos contables para evitar interpretaciones erróneas de las cifras. Aclaró que en el balance cerrado correspondiente al ejercicio 2024, el monto destinado a inversiones rondaba los PESOS DOCE MIL MILLONES (12.000.000.000.-). Preciso que la cifra de PESOS CUARENTA Y DOS MIL MILLONES (42.000.000.000.-) mencionada por la asambleísta corresponde en realidad a un informe con corte al 30 de noviembre de 2025, donde se detalla la distribución de fondos en diversos instrumentos financieros a esa fecha.

Carlos Pirovano Intervino para remarcar que el tratamiento debe circunscribirse exclusivamente a lo establecido en el orden del día: el análisis de las cuentas de 2024 entregadas a la Asamblea,,. Recordó a los asambleístas que una de sus funciones primordiales por ley es la de elevar el presupuesto y el balance al Consejo Asesor y a la Auditoría General de la Nación (AGN). Expresó su preocupación ante el hecho de que la Asamblea todavía no haya cumplido con su obligación de elevar los balances de 2023 y 2024, e instó a los presentes a realizar su tarea de manera ordenada y a enfocarse en sus atribuciones legales específicas.

Lara Decuzzi y Paulo Ricci Informaron que, según los registros de envíos de la Asamblea, solo cuentan con un informe preliminar del ejercicio 2023 que fue recibido el 4 de noviembre de 2024, pero aclaró que no han tenido a disposición el balance final debidamente auditado para su elevación.. Precisarón que los documentos recibidos en esa fecha corresponden a dos archivos: el estado contable firmado y un anexo con el informe de auditoría de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) referido al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2023.

Liliana Mazure expresó que la Asamblea no ha contado con el material definitivo para el tratamiento del balance 2023 y manifestó que, una vez que el instituto remita toda la documentación necesaria, la Asamblea se encargará de realizar el trabajo de revisión y elevación de los ejercicios 2023, 2024 y 2025 de forma conjunta en la próxima sesión ordinaria.

6. Informes de Inversiones: Informe de la Presidencia del INCAA sobre la situación de Letras, Bonos e Inversiones realizadas en 2025.

Liliana Mazure analizó la situación y sostuvo que el instituto parece haberse transformado en una "entidad financiera". Manifestó que si dicha función se utilizara para potenciar la producción audiovisual mediante herramientas como el cash rebate o el tax rebate, no resultaría

desacertado, pero expresó su preocupación por el elevado porcentaje de fondos que no están siendo destinados al fomento directo y permanecen colocados en títulos de deuda.

Carlos Pirovano explicó que, según lo dispuesto en el Artículo 5, inciso 25 de la Ley de Cine, el instituto está facultado para emplear sus disponibilidades financieras en la adquisición de títulos de deuda pública, letras de tesorería u otros valores análogos mientras los fondos no se destinen al objeto expresado en la norma. Informó que al iniciar su gestión el gasto en edificios y estructura consumía el SESENTA Y CINCO POR CIENTO (65%) del presupuesto, y que mediante una reestructuración profunda lograron reducirlo al VEINTE POR CIENTO (20%), liberando así un CUARENTA Y CINCO POR CIENTO (45%) de los recursos para el fomento cinematográfico. Preciso que el INCAA cuenta actualmente con VEINTISIETE MILLONES DE DÓLARES (USD 27.000.000), de los cuales VEINTIDÓS MILLONES DE DÓLARES (USD 22.000.000) ya se encuentran formalmente comprometidos: OCHO MILLONES DE DÓLARES (USD 8.000.000) corresponden a convocatorias del año 2025 y CATORCE MILLONES DE DÓLARES (USD 14.000.000) para las del año 2026. Defendió la inversión en bonos y letras apelando al "Principio de Prudencia", argumentando que cuando un productor gana un premio no retira el dinero de forma inmediata, y que el instituto tiene la obligación de resguardar ese capital de la inflación para asegurar que el valor se mantenga al momento efectivo del cobro.

Martín Ferrari denunció que la industria cinematográfica está financiando el déficit del Estado mediante la inmovilización de recursos en el mercado financiero a través de instrumentos como bonos y letras. Sostuvo que la existencia de un excedente para invertir es prueba de una subejecución presupuestaria que paraliza la actividad y perjudica a provincias como Neuquén, que se encuentra entre las principales aportantes de espectadores al fondo. Rechazó rotundamente que el dinero del fomento termine en la "especulación financiera" en lugar de destinarse a mejores sueldos, equipamiento e infraestructura para los realizadores.

Carlos Pirovano replicó que no existe subejecución y que los títulos públicos son activos que forman parte del stock de deuda y no del flujo del déficit. Aseguró que la contabilidad no es una cuestión de enfoques u opiniones, sino de hechos comprobables, y que es una gestión responsable cuidar el dinero de los ganadores de concursos mediante los únicos instrumentos que el Congreso autoriza mientras los proyectos cumplen sus plazos de desarrollo.

Paulo Ricci celebró como una buena noticia que el INCAA cuente con fondos disponibles. Manifestó que la prioridad absoluta es que dicha solvencia financiera redunde en un mayor estímulo, apoyo y fomento a la producción nacional, especialmente tras los años de dificultades que ha atravesado el sector. Comentó que, si las herramientas financieras permiten multiplicar los recursos para el cine, es positivo que la gente de la industria aprenda de los financistas y viceversa.

7. Análisis de Resoluciones: Consideración de las Resoluciones emitidas por la Presidencia del INCAA desde la última Asamblea el 9 diciembre de 2025 a la fecha.

Las resoluciones dictadas desde la última reunión de la Asamblea Federal ya han sido mencionadas o debatidas en los puntos anteriores del orden del día, como aquellas referidas a la conformación del Consejo Asesor y al nuevo protocolo de calificación de películas. Motivo por el cual se prosiguió con el próximo punto del orden del día.

8. Reconocimiento de Costos: Tratamiento de la política de Reconocimiento de Costos, en referencia a la Resolución INCAA N° 184/2025.

Carlos Pirovano informó que la resolución que fija el costo medio fue objeto de un extenso diálogo con los sectores de la industria, mencionando que se mantuvo conversaciones con la Cámara Argentina de la Industria Cinematográfica (CAIC) y la Asociación de Productores Independientes de Medios Audiovisuales (APIMA), quienes expresaron su conformidad con la normativa. Manifestó que su objetivo a largo plazo es que, una vez que se logre sanear el pasivo de proyectos antiguos conocido como "el caño viejo", el costo medio de una película nacional regrese a su valor histórico tradicional de PESOS UN MILLÓN DE DÓLARES (USD 1.000.000.-) o PESOS UN MILLÓN DOSCIENTOS MIL DÓLARES (USD 1.200.000.-), niveles que se registraron durante la década de 1990. Señaló que, tras un periodo de declive que alcanzó su punto más bajo en el año 2023, la cifra actual de PESOS SEISCIENTOS MILLONES (\$600.000.000.-) representa un avance en la recuperación gradual de los valores de fomento de gestiones previas.

Hugo Castro Fau intervino en su calidad de asesor jurídico de la Asamblea Federal para dejar constancia de que este cuerpo colegiado ya había formulado con anterioridad una política de fomento específica. Recordó que, en dicha instancia, la Asamblea había propuesto establecer el costo medio de la película nacional de largometraje en un monto de PESOS MIL DOSCIENTOS MILLONES (\$1.200.000.000.-).

Carlos Pirovano respondió que, independientemente de las sugerencias o políticas formuladas por la Asamblea, la ley establece que la atribución de fijar el costo medio es una competencia exclusiva del Presidente del Instituto.

Liliana Mazure manifestó su rechazo a la política implementada y sostuvo que el valor de PESOS SEISCIENTOS MILLONES (\$600.000.000.-) no se corresponde con la realidad que enfrentan los realizadores. Afirmó que esa cifra "no existe" en el contexto actual de la industria y propuso formalmente que la Asamblea Federal vote el rechazo de la resolución presidencial que determina dicho costo medio.

Votación Se sometió a votación la moción de rechazo a la resolución que establece el costo medio en PESOS SEISCIENTOS MILLONES (\$600.000.000.-).

A favor del rechazo: Provincias de Buenos Aires, Neuquén y Catamarca.

En contra del rechazo: Provincias de Río Negro, Santa Cruz, Chubut y Mendoza.

La moción de rechazo no alcanzó la mayoría necesaria para su aprobación.

9. Festivales Nacionales: tratamiento sobre las políticas de Fomento para Festivales Nacionales.

Carlos Pirovano informó que el presupuesto del INCAA para el año 2026 destina un total de PESOS CUATROCIENTOS CUARENTA MILLONES (\$440.000.000.-) para ayudas a festivales nacionales. Explicó que el mecanismo de fomento se rige por una resolución que establece que la iniciativa debe surgir de las provincias: la jurisdicción debe solicitar formalmente el apoyo para un festival, explicando cómo lo apoya la propia provincia, y el instituto acompaña con un porcentaje sobre ese aporte hasta un tope determinado. Defendió la necesidad de jerarquizar los eventos basándose en su tradición y nivel: “Porque no le vas a dar al Festival Cuchuflito y Tía Maruca. No. Si la provincia cree que el festival amerita manda, explica, defiende y se incorpora al listado.”

Liliana Mazure señaló que la provincia de Buenos Aires solicitó el tema debido a que nunca recibieron los convenios correspondientes.

Diego Marambio replicó que la provincia de Buenos Aires no presentó ningún pedido formal ni presupuesto de acuerdo con la resolución vigente y que, de hecho, el festival de Tandil se comunicó directamente con el instituto ante la falta de gestión provincial.

Pablo Torello cuestionó los términos utilizados por el Presidente para referirse a los festivales de menor envergadura, calificando de impertinente la categorización peyorativa de eventos en una provincia que cuenta con cincuenta y dos (52) festivales de cine de vasta tradición. Aseguró que la provincia propuso una línea de apoyo para todos esos festivales al inicio del año anterior, pero que el INCAA, bajo un criterio arbitrario, decidió que de los cincuenta sólo uno era elegible para el convenio. Afirmó que la provincia no firmó el convenio de Tandil porque no estaba de acuerdo en que se excluyera al resto de los festivales bonaerenses. Informó que, ante la falta de apoyo nacional, la provincia financió cincuenta festivales con un millón de pesos para cada uno, a pesar de que el Gobierno Nacional no envía los fondos de coparticipación correspondientes.

Carlos Pirovano insistió en que la decisión de no apoyar a Tandil fue de la provincia al no firmar el convenio, y que el instituto simplemente no puede financiar a los cincuenta festivales si la provincia no lo pide bajo la normativa de apoyo vigente.

Paulo Ricci expresó que la retracción de la recaudación y la falta de coparticipación están afectando las finanzas de todas las áreas de cultura provinciales. Preguntó específicamente qué define técnicamente a un "festival nacional" para evitar que los recursos se diluyan y pierdan su carácter de política de fomento real. Sugirió que la responsabilidad de los gestores es jerarquizar y diferenciar los festivales consolidados de los emergentes para que el pedido al INCAA esté legitimado por una trayectoria de relevancia.

Carlos Pirovano coincidió en que el primer criterio de jerarquización es la propia provincia: si una jurisdicción está dispuesta a invertir sus propios recursos en un festival, está demostrando que el evento es importante para su territorio y el INCAA acompañará esa decisión.

Lara Decuzzi recordó que la resolución anterior establecía condiciones técnicas claras sobre programación y cantidad de películas nacionales e internacionales para categorizar los festivales, algo que la normativa actual no especifica con el mismo detalle. Consultó por qué el fondo de festivales se redujo de PESOS SEISCIENTOS MILLONES (\$600.000.000.-) el año pasado a PESOS CUATROCIENTOS CUARENTA MILLONES (\$440.000.000.-) este año.

Carlos Pirovano explicó que la reducción presupuestaria fue una decisión del Congreso Nacional, que recortó las partidas enviadas originalmente por el instituto. Manifestó que, aunque deben ser respetuosos con la ley de presupuesto aprobada, aspira a solicitar una ampliación presupuestaria al Congreso hacia fin de año si los fondos se agotan, aunque aclaró que no se trata de una promesa firme. Instó a las provincias a enviar sus pedidos en tiempo y forma.

10. Informe sobre situación de la ENERC

Carlos Pirovano informó que los instructores de la ENERC solicitaron un aumento salarial, pedido que consideró razonable. Explicó que se implementó un nuevo reglamento para ordenar las horas cátedra, que anteriormente se asignaban de forma desordenada y arbitraria, provocando demoras de hasta dos meses en los pagos. Este reordenamiento permitió otorgar un aumento aproximado del VEINTIOCHO POR CIENTO (28%) en el valor de la hora cátedra, lo que representa una inversión total de unos PESOS DOSCIENTOS MILLONES (\$200.000.000.-). Aclaró que dicho incremento se otorgó inicialmente a cuenta de futuros aumentos para evitar conflictos internos con otros empleados del instituto, pero que mediante una resolución reciente se dispuso que los instructores perciban los mismos aumentos paritarios que el resto del personal del INCAA a partir de mayo de 2026. Asimismo, comunicó que se está trabajando en la reforma del plan de estudios y que a fin de año vence el mandato del actual rector, por lo que se iniciará el proceso de selección para el nuevo cargo, invitando a los assembleístas interesados a participar. Respecto a las sedes regionales, señaló que se está migrando hacia un acuerdo marco donde la provincia debe hacerse cargo del sueldo del vicerrector. Sobre la sede Formosa, mencionó que existieron irregularidades en el pago de sueldos a no docentes por parte de la provincia, pero que la situación se está regularizando y el rector levantó las correlatividades para que los alumnos no pierdan el año.

Liliana Mazure consultó específicamente por la situación de los instructores y las sedes, con especial énfasis en la sede de Formosa, transmitiendo la preocupación del claustro docente sobre la continuidad académica.

Maximiliano Schonfeld intervino para informar que las provincias del NEA conformaron una mesa técnica para buscar una solución de fondo a la problemática de la sede Formosa. Manifestó su aprecio personal por dicha sede, donde fue instructor, y detalló que se están evaluando

alternativas como una gestión mixta o la absorción por parte de una universidad nacional para garantizar la formación de los estudiantes de la región.

Martín Ferrari manifestó su profunda preocupación por el deterioro académico derivado de la virtualidad en la sede Patagonia Norte. Sostuvo que no existen argumentos académicos que validen las clases por Zoom en 2026 y afirmó tajantemente que "no se puede enseñar cine por Zoom", denunciando que la virtualidad afecta la retención y el aprendizaje de los alumnos. Exigió el retorno urgente de la presencialidad para el segundo cuatrimestre, argumentando que la enseñanza del cine se basa en el vínculo maestro-discípulo y requiere el contacto directo con el equipamiento. Cuestionó que, mientras el instituto invierte fondos en la bolsa, no se destinen recursos para cubrir los pasajes de los docentes presenciales.

Carlos Pirovano replicó que no es sustentable un modelo educativo basado en enviar instructores desde Capital Federal en avión y costearles hoteles durante una semana. Sostuvo que lo lógico es que cada sede desarrolle su propio cuerpo docente local para lograr una autonomía real y que el presupuesto de la ENERC, que hoy representa el DOCE POR CIENTO (12%) de los recursos del instituto, no puede seguir creciendo de forma infinita. Afirmó que la responsabilidad académica se cumple de forma remota y que, si una provincia considera indispensable la presencialidad de un instructor específico de Buenos Aires, debe ser la propia provincia la que asuma los gastos de traslado.

Martín Ferrari señaló la contradicción de financiarse con bonos mientras se retacea la inversión en docentes. Argumentó que la provincia no cuenta aún con profesionales con la trayectoria necesaria para reemplazar el nivel de los instructores nacionales y defendió el derecho de los alumnos del interior a recibir la misma calidad educativa que los de la sede centro.

Aureliano Rodriguez Gomez se sumó al reclamo y advirtió que la falta de apoyo a las sedes regionales generará un deterioro en la industria a largo plazo, provocando que los alumnos abandonen sus estudios. Instó a la Presidencia a rever su postura para encontrar una solución que no perjudique la formación federal.

Sergio Acosta consultó sobre el proceso de elección de docentes y propuso recuperar un modelo de "50/50" (mitad locales y mitad de Buenos Aires) que funcionó con éxito anteriormente. Sugirió este esquema como una voluntad política para iniciar una transición gradual que permita nutrir a las sedes con realizadores regionales sin perder el aporte de los docentes con mayor experiencia.

Carlos Pirovano aceptó la posibilidad de discutir un plan de transición con plazos determinados, sugiriendo un periodo de TRES (3) AÑOS para que las provincias formen a sus propios instructores. Insistió en que el objetivo debe ser agotar la dependencia de Buenos Aires para evitar que los egresados terminen migrando a la capital por falta de referentes locales.

Lizenth Barros planteó la necesidad de que las capacitaciones de la ENERC lleguen también a provincias sin sedes físicas, como Catamarca. Propuso realizar convenios con universidades locales para financiar talleres y capacitaciones conjuntas.

Lara Decuzzi propuso conformar una mesa técnica de trabajo integrada por las provincias, los vicerrectores y el rector para reformular el plan de sedes regionales. Sugirió trabajar en un plan que rescate lo virtuoso del modelo original pero que se adapte al nuevo paradigma económico y tecnológico, estableciendo objetivos claros y estrategias territoriales.

Carlos Pirovano dio el visto bueno para la creación de la mesa técnica de trabajo, pero reiteró que la sustentabilidad económica es un punto no negociable. Encomendó a la Subgerencia Film Commission la coordinación de este espacio de diálogo, aclarando que garantiza la voluntad de diálogo pero no el éxito inmediato de las gestiones para el inicio del segundo cuatrimestre en julio.

Sergio Acosta solicitó que el nuevo plan de estudios incluya formación técnica en áreas de industria como presupuesto, financiamiento, mercado, coproducción y distribución.

Carlos Pirovano coincidió en la importancia de incorporar materias sobre manejo financiero y pitching. Explicó que el Consejo Académico, formado por gente de la industria, es el encargado de los planes y que los mismos deben ser aprobados por el Ministerio de Educación, invitando a los asambleístas a elevar sus sugerencias por esa vía.

11. Art. 3 incisos h e i de la ley de cine. Se informe que inspecciones o verificaciones por intermedio de funcionarios debidamente acreditados, se han realizado para controlar el cumplimiento de las leyes, reglamentaciones y resoluciones que rigen la actividad cinematográfica y la exhibición de películas. Si se han inspeccionado los libros y documentos de exhibidores u Otts con domicilio en Argentina, si se han levantado actas de comprobación de las infracciones, si se han efectuado intimaciones, si se han promovido investigaciones, si se ha solicitado el envío de toda la documentación que se considere necesaria, si se han ejercido acciones judiciales, si se han solicitado órdenes de allanamiento y si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública; informe si se han aplicado las multas y sanciones previstas en la ley de cine. Informe que acciones concretas se han realizado como administrador (inciso e) del Fondo Nacional de Fomento Cinematográfico para dar cumplimiento al dictamen técnico AFIP del 29 de junio de 2023 que en copia se acompaña."

Liliana Mazure solicitó información precisa sobre el cumplimiento del dictamen técnico de la AFIP del 29 de junio de 2023, el cual establece que las plataformas OTT con domicilio en Argentina deben pagar el gravamen del DIEZ POR CIENTO (10%) fijado por la Ley de Cine. Interrogó sobre si el instituto ha realizado inspecciones de libros y documentos, actas de comprobación, intimaciones o acciones judiciales para asegurar que este impuesto ingrese al Fondo Nacional de Fomento Cinematográfico. Recordó que durante su gestión se logró que las primeras plataformas, como Telecom y Telefónica, pagaran este gravamen, y sostuvo que no se trata de un nuevo impuesto, sino de la correcta distribución de recursos que los usuarios ya abonan.

Carlos Pirovano declaró que la gestión actual no ha realizado ni realizará acciones para el cobro de dicho gravamen a las plataformas OTT. Fundamentó esta decisión en que no cree en políticas que impliquen aumentar la presión impositiva sobre la gente y afirmó que el gobierno anterior tampoco realizó gestiones efectivas al respecto. Sostuvo que, como economista liberal, prefiere que los ciudadanos dispongan de sus recursos y argumentó que la fiscalización de los tributos es competencia exclusiva de ARCA (ex AFIP) y no del INCAA. Respecto a los exhibidores cinematográficos, aseguró que el instituto cumple plenamente con la ley a través de la fiscalización de las declaraciones juradas mediante el formulario F700, pero reiteró que el tema de las OTT deviene "abstracto" dado que en 2028 los recursos pasarán a rentas generales.

Hugo Castro Fau intervino en su carácter de asesor jurídico para recordar que, según la ley, el Presidente del INCAA es el administrador y guardián del Fondo Nacional de Fomento Cinematográfico. Citó el dictamen técnico de la AFIP de 2023 que confirma que las OTT están alcanzadas por el gravamen en relación al alquiler o compra de videogramas. Preguntó formalmente si la Presidencia va a dar cumplimiento a los incisos h e i del artículo 3 de la Ley de Cine, los cuales facultan al instituto a inspeccionar libros, solicitar órdenes de allanamiento, requerir el auxilio de la fuerza pública y aplicar multas y sanciones a los incumplidores. Advirtió que este gravamen debería cobrarse incluso con carácter retroactivo de cinco años.

Carlos Pirovano reiteró que la respuesta oficial es que el INCAA fiscaliza lo que le compete, como las entradas de cine en las salas, pero que la recaudación de impuestos nacionales es tarea del organismo recaudador del Estado. Afirmó que el instituto da "pleno cumplimiento de la ley" bajo su interpretación administrativa y que, de considerarlo necesario, los assembleístas pueden accionar legalmente si no están de acuerdo con su postura de no perseguir fiscalmente a las plataformas de streaming. Concluyó que su gestión no utilizará funcionarios acreditados para inspeccionar documentos de las OTT ni solicitará el auxilio de la fuerza pública para estos fines tributarios.

12. Concursos: acordar instancias de trabajo para definir bases de los próximos concursos según cronograma acordado.

Carlos Pirovano abrió el tratamiento del punto señalando que gran parte de las bases ya habían sido conversadas en instancias previas. Manifestó que el instituto aplicará bases generales para todos los concursos y bases particulares para los casos específicos discutidos con los representantes regionales.

Lara Decuzzi compartió que, según el calendario acordado, es el turno de los concursos regionales y que existe una gran demanda de información por parte de los realizadores sobre las condiciones de residencia y requisitos técnicos. Informó que se reunió para definir estos criterios, buscando asegurar la previsibilidad que el sector reclama. Expresó su preocupación por el requisito de alcanzar un mínimo de proyectos por región para habilitar los premios, sugiriendo que, según los datos de la última convocatoria de Ópera Prima Nacional, varias regiones no alcanzarían el cupo mínimo de seis proyectos. Propuso que, en casos de

coproducciones, se pueda validar el proyecto para acreditar el mínimo en ambas regiones involucradas para evitar que los concursos queden desiertos.

Guillermo Garma detalló los puntos técnicos convenidos con los representantes de las provincias. Preciso que el productor debe ser obligatoriamente de la región, aunque se permiten coproducciones nacionales siempre que al menos uno de los coproductores sea local. Especificó que se requieren al menos SEIS (6) proyectos por región para otorgar un premio y DIECISÉIS (16) para otorgar dos; en caso de no alcanzar el mínimo, los proyectos pasarán a una "bolsa común" o repechaje. Sobre los requisitos técnicos, informó que se exigirán DOS (2) AÑOS de residencia para el productor mayoritario, un mínimo del VEINTICINCO POR CIENTO (25%) de técnicos locales y que el rodaje se realice en un CINCUENTA POR CIENTO (50%) o más en la región. Aclaró que el director no tiene por qué ser de la región de forma excluyente, pero que se le otorgará un puntaje extra si lo es. Confirmó que la convocatoria estará abierta durante un mes, entre junio y julio, para largometrajes de ficción o animación.

Carlos Pirovano rechazó la propuesta de que un mismo proyecto sume para el cupo de dos regiones distintas, calificándolo como una "trampa al solitario". Sostuvo que el objetivo real es desarrollar la región y que se debe ser riguroso para que las productoras locales lleven la voz cantante y no sean utilizadas por productoras de Buenos Aires con socios minoritarios en el interior. Defendió que si una región no llega al mínimo, es adecuado que compita con otra de similar nivel de desarrollo para generar masa crítica.

Liliana Mazure manifestó que la Provincia de Buenos Aires no estaba enterada de ninguna de estas definiciones sobre los concursos regionales. Denunció que se han tomado decisiones que afectan a todo el país y al federalismo sin incluir a su jurisdicción en las mesas de trabajo. Aseguró que el sector en su provincia se enterará de estas bases por la presente asamblea y declinó emitir opinión técnica en ese momento debido a la falta de consulta previa.

Lara Decuzzi explicó que estas bases se desprenden del cronograma de concursos publicado en diciembre del año anterior y que el trabajo técnico se realizó para dar respuesta a la inminente convocatoria de junio. Invitó a los representantes de Buenos Aires a sumarse al diálogo constructivo, señalando que el grupo de provincias que ella integra decidió trabajar con los márgenes de negociación que el Presidente otorga para evitar un estado de rechazo que paralice las políticas audiovisuales.

13. Definición de calendario asambleas

Carlos Pirovano sugirió que, debido a que la asamblea debe trabajar en la elevación de los estados contables y balances pendientes de varios ejercicios, tal vez sería razonable tomarse un plazo de tres meses para avanzar con esa tarea técnica de manera ordenada.

Se concluyó el punto estableciendo el 14 de julio de 2026 como la fecha para la próxima asamblea federal, dejando constancia de que se mantendrá cierta flexibilidad para ajustar el día exacto de ser necesario.

14. Consulta sobre el fondo para exhibidores: tiempos, modalidad, etc.

Carlos Pirovano informó que durante el año anterior se cumplió satisfactoriamente con la cuota de pantalla en toda la línea y destacó que el TREINTA Y TRES POR CIENTO (33%) de los exhibidores logró superar el VEINTE POR CIENTO (20%) de exhibición de cine nacional. Calificó este beneficio como un incentivo a los exhibidores a proyectar películas nacionales atractivas, ya que el retorno económico del ticket nacional resulta superior al del ticket internacional. Mencionó que salas como Malba, Cacodelphia y la cadena Atlas se encuentran entre los exhibidores que están percibiendo montos significativos por este concepto.

Elisabet Balnco precisó que existen CUARENTA Y DOS (42) exhibidores en condiciones de solicitar el subsidio, de los cuales VEINTIOCHO (28) ya han realizado el pedido formal a través de la plataforma INCAA en línea. Agregó que hay ocho solicitudes actualmente en revisión por correcciones técnicas y seis exhibidores a los que el instituto está contactando telefónicamente para que se presenten antes de la fecha límite. Manifestó que alcanzar la cifra de TREINTA Y CINCO (35) exhibidores cobrando el beneficio sería un resultado excelente para la política de fomento.

Carlos Pirovano confirmó que el monto total del fondo a distribuir es de DÓLARES MEDIO MILLÓN (USD 500.000.-), el cual se prorratea entre los beneficiarios de acuerdo con su recaudación. Detalló que el plazo para presentarse vence el TREINTA (30) de abril y que los pagos se harán efectivos en el mes de mayo de 2026, una vez que se complete la auditoría de todas las declaraciones juradas del formulario F700 de fiscalización correspondientes al año.

No habiendo más asuntos que tratar y siendo las 14.15h el señor Presidente da por finalizada la sesión labrándose la presente Acta y procediéndose a la firma:



INCAA
INSTITUTO NACIONAL
DE CINE Y ARTES
AUDIOVISUALES

.....

LILIANA MAZURE

PROVINCIA DE BUENOS AIRES

.....

SILVINA NANO

PROVINCIA DE CÓRDOBA

.....

LARA DECUZZI

PROVINCIA DE RÍO NEGRO



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Año de la Grandeza Argentina

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Referencia: ACTA ASAMBLEA FEDERAL 24 DE ABRIL 2026

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 16 pagina/s.